

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

| | |
|-------------------|--|
| DEMANDANTE | : JONNATAN ANDRÉS OCAMPO ROMERO |
| DEMANDADO | : EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIONES LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. – EASY FLY S.A- |
| TIPO DE PROCESO | : ORDINARIO |
| RADICADO NACIONAL | : 05-001-31-05-016-2021-00251-01 |
| RADICADO INTERNO | : 013-24 |
| DECISIÓN | : REVOCA AUTO |
| ACTA NÚMERO | : 041 |

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el **recurso de apelación**, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que el contrato de trabajo del demandante terminó por justa causa imputable a la sociedad demandada; declarar la ilegalidad de la cláusula contractual que estableció la naturaleza no salarial de la bonificación mensual que recibía el accionante; que hubo pago deficitario de las prestaciones sociales y vacaciones pagadas a la demandante en vigencia de la relación laboral, por no tener como factor salarial la bonificación mensual recibida; declarar la ilegalidad de la suspensión del contrato de trabajo del demandante, a partir del 1º de septiembre de 2020 al no existir fuerza mayor; que la sociedad demandada incumplió con las obligaciones contraídas en la carta del 21 de mayo del 2020 de pagar un auxilio extra legal a la demandante de \$877.803 denominado “auxilio mínimo vital covid 19”.

CONDENAR al accionada, al pago de la indemnización por despido indirecto; a los intereses legales sobre la anterior pretensiones o en subsidio, la

indexación de la condena; al reajuste de las prestaciones sociales y vacaciones causadas durante vigencia de la relación laboral, teniendo en cuenta para ello la bonificación mensual que recibía; al pago de los intereses legales sobre la anterior pretensión o en subsidio la indexación; se condene al pago de la sanción del ordinal 3º del art. 1º de la Ley 52 de 1975, por la mora en el pago completo de los intereses a la cesantía; al pago de los salarios causados del 1º de septiembre al 10 de diciembre de 2020; a la sanción moratorio del art. 99 de la Ley 50 del 1990 por no haber consignado las cesantías de forma completa al no haber tenido como factor salarial para su cuantificación la bonificación mensual; la indemnización moratoria del art. 65 del CST por el no pago completo de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato; al pago del auxilio extralegal dejado de pagar denominado “auxilio mínimo vital covid 19” desde el 21 de mayo de 2020 y hasta la fecha de la renuncia del demandante el 10 de diciembre 2020; y al pago de las costas procesales.

Como supuestos facticos con que sustenta sus pretensiones, manifiesta que el demandante se vinculó el 2 de noviembre de 2016, mediante contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñar el cargo de “Despachador aeronaves 2”, prestando sus servicios en el Aeropuerto Olaya Herrera; las funciones desempeñadas por el actor, eran las de: determinar el peso y balance de las aeronaves antes de cada vuelo, hacer los cálculos de combustible y firmar la orden de tanquear el avión, hacer el seguimiento de vuelo en tiempo real, coordinar las tareas de cargue y descargue de la aeronave, coordinar el abordaje de los pasajeros y vigilar que se cumplieran las horas del reglamento aeronáutico en operaciones; el último salario devengado por el actor, fue de \$1.456.186 más una bonificación o auxilio extra legal mensual de \$320.000.

Asegura que el 24 de marzo del 2020, la sociedad demandada le suspendió el contrato de trabajo alegando fuerza mayor en virtud del brote del Covid 19 y en ella le informaba que su contrato de trabajo sería suspendido temporalmente desde el 25 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020 “o hasta que la empresa determine levantar esa medida por necesidades puntuales de la operación”; la suspensión del contrato de trabajo fue prorrogado en 4 oportunidades, siendo la última prórroga el 30 de agosto de 2020.

En el art. 3º del Decreto 847 del 14 de junio de 2020, autorizó la implementación de planes piloto para el transporte doméstico de personas por vía aérea, desde esa fecha se fue reactivando el transporte aéreo de

pasajeros a nivel nacional y la accionada había reanudado sus operaciones comerciales para el 1º de septiembre de 2020 al no tener restricciones legales para desarrollar su objeto social, ni tenía restricciones por parte de la aeronáutica aeronáutica civil.

Que elevó derecho de petición el 26 de octubre de 2020, solicitando el reintegro a su puesto de trabajo, el cual no fue contestado, razón por lo que presentó acción de tutela y por orden judicial dieron respuesta el 30 de noviembre 2020 en forma negativa; el 10 de diciembre 2020 el actor presentó renuncia motivada exponiendo una suspensión por más de 200 días y la falta de pago del auxilio acordado ni de salario.

Que antes de la presentación de la renuncia, demandada trajo a Medellín al Sr. Daniel Escobar, empleado de la ciudad de Bogotá, para realizar las mismas funciones que el actor tenía, pero con un salario inferior, con lo que concluye que no existía ninguna fuerza mayor si razones de orden económico; EASY FLY S.A no le informó al Ministerio del Trabajo la suspensión del contrato de trabajo del actor ni lo hizo durante las 4 prórrogas, como es exigido en el numeral 2º del art. 67 de la Ley 50 de 1990; que tampoco se solicitó permisos de suspensión del contrato de trabajo por razones de orden económico conforme lo exige el art. 50 del CST.

Señala durante la relación laboral el actor recibió una bonificación mensual de \$320.000, la cual fue pactada en el contrato de trabajo como no constitutiva de salario, pero asegura que esa bonificación era un salario adicional que el demandante recibía, no tenía una destinación específica, simplemente se lo pagaban junto con su nómina sin existir supervisión de la empresa respecto a su destinación.

Adicionalmente, en la comunicación del 21 de mayo 2020 la accionada adquirió un compromiso formal de pago de auxilio extralegal, denominado “auxilio mínimo vital Covid 19” por valor de \$877.803, el cual nunca pagó al actor y no es incompatible con el pago de salario.

CONTESTACIONES A LA DEMANDA

La sociedad demandada indicó que es cierta la fecha de ingreso del actor, pero aclara desde el inicio, en vigencia y a la terminación del contrato de trabajo, la accionada dio estricto cumplimiento a sus obligaciones legales; las funciones del actor; el salario devengado y la bonificación o auxilio extralegal

y aclara que los auxilios reconocidos y pagados se pactaron como no constitutivos de salario, sin que el actor haya efectuado reclamación o manifestado inconformidad; acepta la suspensión del contrato y prorroga por 4 veces y la última prorroga fue el 30 de agosto de 2020, teniendo en cuenta la fuerza mayor que dio origen a la suspensión contractual; y el pacto donde la bonificación no constituía salario. Las afirmaciones relativas al Decreto 847 de 2020, a la falta de solicitud de permiso de suspensión, que la bonificación se trataba de un salario adicional y el compromiso del pago del auxilio extralegal, no las enmarca en hechos de la demanda. En relación como los hechos restantes, asegura que no son ciertos.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, por estar soportadas en supuestos de hecho equivocados y en fundamentos de derecho no aplicables al caso. Y propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido por ausencia de causa, prescripción, inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio a cargo de la demandada, pago, compensación, buena fe, mala fe de la parte actora, excepción genérica, innominada (expediente digital 18).

ETAPA DE DECRETO DE PRUEBAS

El Juzgado de conocimiento no decretó la prueba testimonial al no mencionarse cuál es el hecho que pretendía probar con los testigos mencionados.

RECURSOS INTERPUESTO CONTRA AUTO

El apoderado de la parte accionada interpone el recurso de apelación la decisión adoptada, aduciendo que en el texto de la contestación de la demanda se plasmó que los testigos iban a deponer sobre la totalidad de los hechos de la demanda y de la contestación de la demanda; que no había un hecho particular en el que fueran a entrar el testimonio; y concluyó manifestando que en caso de que el Juzgado no cambiara su decisión, interponía el recurso de apelación.

La anterior decisión no fue repuesta por el Juzgado ante el incumplimiento de lo establecido en el art 212 del CGP, y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 24 de enero de 2024, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito DECLARÓ que entre las partes existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido, el cual se ejecutó entre el 2 de noviembre de 2016 al 10 de diciembre de 2020, el cual terminó por causa imputable a la demandada.

CONDENÓ a la sociedad demandada a reconocer y pagar al demandante:

- Por indemnización por despido sin justa causa, la suma de \$5.970.362
- Auxilio mínimo vital Covid-19, la suma de \$5.266.818

DECLARÓ probadas parcialmente las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido por ausencia de causa, y pago. Condenó en costas a la parte demandada.

IMPUGNACIÓN

La apoderada del demandante apela la decisión de primera instancia, solicitando en **primer lugar** el pago de los salarios que se debieron devengar entre el 1º de septiembre de 2020 hasta la terminación de la relación laboral, oportunidad en que no hubo más prórroga ni hubo un argumento jurídico para sustentar la suspensión del contrato. Que si bien, se declaró la legalidad de la suspensión de los contratos, a partir del 1º de septiembre no se le informó al actor la suspensión del contrato como se hizo desde el 25 de marzo de 2020; el hecho de no estar prestando el servicio no se le puede imputar al actor y no había un respaldo normativo al no haber notificado al actor, lo que daba lugar a que la accionada reconociera dichos salarios, además, teniendo en cuenta el inicio de sus operaciones, la antigüedad del actor, la necesidad de un despachador de aeronaves que era el cargo ejecutado.

Como consecuencia de lo anterior, considera que se debe reconocer la indemnización moratoria del art. 65 del CST, por el no pago de dichos salarios, que debía recibir el actor, en tanto la no prestación del servicio no era por una causal imputable a él y la fuerza mayor había cesado y no se contaba con prórroga de la suspensión.

En tercer lugar, solicita el reconocimiento del reajuste de las prestaciones sociales con las bonificaciones, porque el auxilio de transporte hacía parte de su salario, bajo el entendido que dicho auxilio no tenían la destinación de

transporte ni alimentación pues el actor prestaba sus servicios en el aeropuerto ubicado en Medellín y la representante legal dijo que ocasionalmente se trasladaba a otros lugares de trabajo, en ese momento se le proporcionaba el transporte necesario y su destinación no era facilitar la prestación del servicio; que fue probado que ante la necesidad del actor desplazarse, le eran reconocidos viáticos, lo que hacía que fuera parte de su salario. Que lo mismo ocurre con la alimentación, pues las bonificaciones eran habituales; la accionada no conoce la destinación de dichos auxilios debiendo corroborarlo.

Solicita se haga referencia a las sentencias invocadas por la accionada y las expuestas en los alegatos de conclusión, por tratarse de presupuestos fácticos idénticos, donde se le entregaba al trabajador auxilios que no tenían la destinación y eran usados como retribución del servicio.

En quinto lugar, pretende que al prosperar el reajuste y al tratarse de pagos parciales, se condene a la sanción moratorias aplicables, ello es, el CST y Ley 50 de 1990 y la ley aplicable al pago de los intereses a las cesantías.

En sexto lugar, solicita sean revisadas las sumas de dinero al actor, resaltando que no se puede revocar en peor y se conceda.

Finalmente solicita se condene en costas a la demandada.

Por su parte, el apoderado de la accionada EASY FLY S.A resalta que se encuentra pendiente el tema relacionado con las pruebas, debiéndose aplicar el Tribunal el art. 330 del CGP.

En relación con la sentencia considera no existió causal para que se le imputarle a la accionada la renuncia del actor en tanto el ordinal b) del art. 62 del CST consagra causales taxativas que se tienen que imputar y demostrar que el empleador incurrió en ellas a efectos para dar por terminado sin justa causa el contrato de trabajo, y a su parecer, el Despacho entendió que la razón que generó la terminación del contrato de trabajo, lo fue la causal 6º del literal b) del art. 62 del CST, relativo al incumplimiento sistemático sin razones válidas por el empleador, de las obligaciones legales y convencionales.

Sin embargo, señala que en este evento no hay ningún acuerdo convencional al tratarse de una decisión unilateral de la empresa de dar un auxilio, el cual

dio en una oportunidad; que no existe incumplimiento sistemático porque no existió una obligación al no existir un acuerdo entre las partes.

Conforme a lo expuesto, solicita se considere en la segunda instancia, que la renuncia del actor fue voluntaria porque al ser una razón objetiva, atribuible a la accionada y donde no hubo incumplimiento legal ni convencional.

Que en el evento que no lo hubiera podido dar, ello se generó porque no había dinero y en ese sentido, el A Quo señaló que la empresa no tenía la manera de operar, por lo tanto, no había recursos. Por otro lado, en caso de haber incumplimiento, la norma hablaría de “razones válidas por parte del empleador” y la razón es válida y es la misma que le dio sustento a la suspensión de los contratos de trabajo.

Asegura que en la carta del 26 de junio de 2020 donde se dio a conocer el auxilio, se hace alusión a la prórroga de junio al 31 de agosto de 2020 ya que en la prórroga de la suspensión de agosto de 2020 no aparece el auxilio; así las cosas, en el caso hipotético de haber un incumplimiento (el cual reitera que no lo hubo), solo sería por los meses de julio y agosto, el cual no asciende a la suma ordenada por el Juzgado. Y en ese sentido, al no ser un beneficio de carácter legal ni un acuerdo, no hay incumplimiento al no existir una causal para que se ordene la indemnización por la terminación del contrato sin justa causa.

Así mismo expresa que el Juzgado castiga a la accionada doblemente, al ordenarle el pago de un concepto que no debe y lo sancionó porque dio la razón para que el actor renunciara. Sostiene que la indemnización por terminación del contrato de trabajo es una indemnización tarifada y reconoce en forma previa los perjuicios.

En segundo lugar, señala que al no haber condena en contra de la accionada, no podría imponerse costas; además de que las considera elevadas teniendo en cuenta la situación financiera de la compañía, el buen proceder de la empresa, pero destaca la mala fe de la parte demandante.

En tercer lugar, se apartó de lo manifestado por el Despacho, cuando señaló que los testigos no podían aclarar, a su parecer si lo podían hacer, basado en que una cosa es la suspensión de los contratos de trabajo por una causal objetiva y tema es la situación financiera y económica de la empresa.

Finalmente hace referencia al recurso de apelación del demandante, del que se aparta, al haber quedado sustentado lo expuesto por el Juzgado frente a la naturaleza no salarial de los auxilios, sin que se pueda pretender su verificación pues en ese sentido se volvería un pago salarial. Solicita que se abstenga de las condenas interpuestas a la accionada y se condene en costas al actor.

ALEGATOS DE CONCLUSION.

El apoderado de la parte demandante en sus alegatos amplía lo invocado en el recurso de apelación, asegurando frente al pago de salario, que el demandante acreditó que la empresa accionada reanudó sus funciones a partir del 1º de septiembre de 2020 y en ese sentido al iniciarse actividades, no existe la fuerza mayor; no es válida la fuerza mayor al pretender hacer creer que solo operaban tres rutas a partir de septiembre del 2020, existiendo fuerza mayor para unos trabajadores y no para otros, y al demandante no lo clasificó. Que era carga probatoria de la empresa demostrar que en el mes de septiembre del año 2020 seguía existiendo esa fuerza mayor sin que lo haya hecho al haber solo señalado que operaba unas rutas y otras no, sin embargo no tenía restricciones legales para dichas operaciones, y ello se evidencia del enlace <https://volavi.co/aviacion/noticias/easyfly-reactiva-rutas-septiembre-2020>. Por su parte, como errores del despacho, destacan haber dado por demostrado sin estarlo, que existía una fuerza mayor para no reactivar el contrato de trabajo del demandante y pasó por alto el hecho de que la empresa estaba en funcionamiento y tenía por lo menos 16 rutas en operación; también pasó por alto que el aislamiento obligatorio ya no regía y la empresa estaba facultada por operar sus aviones en vuelos comerciales; debió haber dado aplicación al artículo 140 del CST relacionado a los salarios sin prestación del servicio al no cumplirse con esta obligación por parte del empleador inicialmente se genera la indemnización moratoria poniendo pago de salarios del artículo 65 del código sustantivo del trabajo.

Frente al pago de las bonificaciones mensuales que recibía el demandante, asegura que tenía el carácter de salarial porque ellas eran habituales y no tenían una destinación específica, simplemente se lo pagaban junto con su nómina sin existir ninguna supervisión de la empresa respecto de su destinación, pero controlaba y exigía una destinación específica respecto de los gastos de alimentación y transporte cuando el demandante se trasladaba a otra ciudad; que en el interrogatorio de parte, la representante legal confesó que cuando la demandante se tenía que desplazar entre aeropuertos le

pagaban auxilios de transporte de alimentación de eventos entrega los soportes. Invoca la sentencia SL 12.220 de 2017.

Invoca la mala fe de la empresa demandada al dejar de pagar los salarios de septiembre a diciembre de 2020 a pensar de tener derecho el actor; además al pagar auxilios mensuales habituales y no tenerlos como factor salarial en el pago de las prestaciones sociales ni en el pago de las garantías consignadas al fondo de cesantías.

El apoderado de la parte demandada se pronunció sus alegatos, que en la contestación de la demanda solicitó la práctica de prueba testimonial en la medida en que era prioritaria para que el despacho pudiera acceder a la verdad real particularmente frente a las circunstancias de modo tiempo y lugar de la sociedad que la sociedad afrontó en virtud de la pandemia, sin embargo el juzgado en la audiencia no aceptó la práctica de la prueba testimonial argumentando que no se había definido con precisión los hechos sobre los cuales se surtiría los correspondientes testimonios a pesar de haberse dejado claro que la totalidad de los testigos podrían dar fe sobre los hechos del debate probatorio, y en caso de haber escuchado los testimonios, hubiera tenido claridad no solo frente a la fuerza mayor, sino de los problemas económicos; y considera que se está frente a un exceso de ritualismo.

En relación a la decisión de primera instancia, solicita se revoque la sentencia y se absuelva a su representada al ser evidente el correcto de la empresa frente a la suspensión del contrato de trabajo del demandante, ante la existencia de una fuerza mayor frente al cual se dio aviso a los trabajadores como el Ministerio de Trabajo. Se opone al motivo de dar por terminado el contrato de trabajo por parte del actor porque el beneficio que el demandante dice no le fue otorgado se trata de un beneficio de carácter extralegal.

Tampoco se puede hablar de incumplimiento sistemático ante la imposibilidad de reconocer el beneficio porque ello no se dio por capricho o incorrecto actuar, dado que el gobierno decretó la emergencia económica sanitaria y social en Colombia por el Covid 19 y la empresa cuenta con acreedores financieros, arrendadores de aeronaves, seguros impuestos, tasas y contribuciones, proveedores y combustibles; la compañía se vio obligada a cogerse mecanismos de recuperación y protección empresarial del Decreto 560 de 2020 entrando a reorganización empresarial en marzo de 2001; que el auxilio extralegal denominado “auxilio mínimo vital Covid 19” fue ofrecido en una primera oportunidad para ser pagado la primera semana del mes de

junio de 2020 y efectivamente reconocido en la primera quincena de dicho mes y se pudo otorgar en julio de la misma anualidad, pero en agosto el beneficio no era ofrecido porque la empresa no podía.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Antes de conocer la Sala el recurso de apelación de la sentencia proferida en primera instancia, se debe resolver el recurso de apelación interpuesto frente al auto que niega el decreto de la prueba testimonial a la parte demandada y que el juez decidió, pese a tan esencial pedido, continuar con el proceso.

Pues bien, de la contestación de la demanda se extrae en las pruebas testimoniales se solicitó citar a las personas indicadas, las cuales “depondrán sobre los hechos de la demanda y su contestación” (fl. 55 del expediente digital 18).

Por su parte, en la etapa de decreto de pruebas, el Juzgado de conocimiento no decretó la prueba testimonial al no mencionarse cuál es el hecho que pretendía probar con los testigos mencionados. Decisión que fue apelada, por el apoderado de la parte accionada, dado que la contestación de la demanda se plasmó que los testigos iban a deponer sobre la totalidad de los hechos de la demanda y de la contestación de la demanda sin que existiera un hecho particular.

El A Quo realizó la interpretación del recurso interpuesto, señalando que, pese a manifestarse que solo interponía el recurso de apelación, al justificar el recurso parecía que igualmente interpuso el recurso de reposición.

En ese sentido, no repuso el auto al considerar que si bien es cierto que en la contestación se indicó en la petición de la prueba testimonial que los testigos iban a declarar sobre los hechos de la demanda, no obstante, la jurisprudencia ha señalado que el Código General del Proceso estableció el deber de señalar los hechos objeto de prueba, y ello impide que se diga que los testigos van a declarar sobre la totalidad de los hechos de la demanda; así mismo fue cuestionado por el Juez la posibilidad que un testigo conozca sobre la totalidad de los hechos, si su declaración tiene incidencia o puede ser útil a los intereses probatorios, además, porque existen hechos que se acreditan con prueba documental siendo impertinente la prueba testimonial, tal y como sucede con el hecho 1º de la demanda que hace referencia a la

fecha de vinculación laboral, al ser un hecho que se demuestra con prueba documental.

Expresó el Juzgado que no se cumplió con el art. 212 del CGP en tanto, la norma consagra la obligación de enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba sin que sea factible que la manifestación sea general.

Pues bien, el contenido del art. 212 del CGP reza *“Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.”*

El capítulo de los hechos de la demanda, los hechos relatados en los numerales 1º a 6º, 9º, 10º, 14º, 15º y que se relacionan con el contrato laboral celebrado, el salario pactado, las funciones del cargo del actor, la suspensión del contrato de trabajo y sus prorrogas, las solicitudes elevadas por el actor, la renuncia motivada presentada y la “bonificación” o el auxilio recibido por el demandante, cuentan con un sustento en la prueba documental allegada.

Por su parte, los numerales 8º, 11º a 13º, 16º y 17º que manifiestan:

“Octavo: La sociedad demandada, para el 1º de septiembre de 2020, ya había reanudado sus operaciones comerciales. Para esa fecha no tenía restricciones legales para desarrollar su objeto social y tampoco tenía restricciones de parte de la Aeronáutica Civil para operar los trayectos que tenía autorizados.

(...)

Décimo primero: Antes de que el demandante presentara la renuncia, la sociedad demandada trabajo a Medellín a Daniel Escobar, empleado de la ciudad de Bogotá para realizar las mismas funciones que mi mandante tenía. El demandante tiene información de que el señor Escobar aceptó el traslado, con una rebaja de salario respecto del que tenía en dicha ciudad.

Esto significa que la fuerza mayor que le alegaron para no reactivar su contrato de trabajo, no aplicaba para dicho funcionario, pero sí para él. Es decir, no existía ninguna fuerza mayor, Si acaso, razones de orden económico.

Décimo segundo: La sociedad demandada no le informó al Ministerio de Trabajo sobre la suspensión del contrato de trabajo de mi mandante. O por lo menos, no lo hizo durante las cuatro prorrogas que tuvo esa suspensión...

Décimo tercer: La sociedad demandada nunca solicitó permiso de suspensión del contrato de trabajo del demandante, por razones de orden económico...

(...)

Décimo sexto: Esa bonificación no era más que un salario adicional que el demandante recibía de la sociedad demandada.

Este dinero no tenía una destinación específica. Simplemente se lo pagaban junto con su nómina, sin existir ninguna supervisión de la empresa respecto a su destinación, y sin que la empresa indagara en que se lo gastaba, precisamente porque esa bonificación no se le pagaba para cubrir una necesidad específica.

Décimo séptimo: En comunicación del 21 de mayo de 2020, la sociedad demandada adquirió un compromiso formal del pago de un auxilio extralegal denominado “Auxilio Mínimo Vital Covid 19” por valor de \$877.803.

Ese auxilio nunca se le pagó desde el 21 de mayo de 2020, fecha en que adquirió el compromiso formalizado en carta. Hasta el 10 de diciembre de 2020, fecha en que el demandante se desvinculó. (...)”

De una lectura atenta de los hechos, sin dubitación alguna se entendería que los declarantes iban a referirse sobre lo acaecido frente a la fecha en que la accionada EASY FLY S.A retomó sus operaciones comerciales; si es cierta la afirmación relacionada con la inexistencia de fuerza mayor para reanudarse el contrato de trabajo del actor y si la negación de reanudación del contrato versaba en razones económicas; si se realizaron trámites adelantados ante el Ministerio del trabajo para ejecutar la suspensión del contrato de trabajo; hacer un pronunciamiento frente a la bonificación y el Auxilio Mínimo Vital Covid 19.

El tema del formalismo excesivo o exceso de ritual manifiesto, como lo denomina la Corte Constitucional se define “como todo obstáculo para obtener una solución judicial de la controversia jurídica sobre la base de un mal entendimiento de las formas que pasan a ser un fin en sí mismo desconociendo el Antiguo artículo del Código de Procedimiento Civil hoy artículo 11 del Código General del Proceso, especialmente cuando indica que *“al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los Derechos reconocidos por la ley sustancia..., el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”*

A partir de ello, los jueces deben llevar a cabo una adecuada ponderación entre el defecto formal cometido por alguna de las partes y la consecuencia jurídica de subsanación o no, procurando siempre que sea posible favorecer la conservación de los actos procesales. Para llevar a cabo la misma se debe tener en cuenta la entidad del defecto, la finalidad perseguida por la norma infringida en cuanto a los elementos del acto procesal, la trascendencia que el incumplimiento defectuoso cumplimiento del requisito formal tiene respecto

a las garantías procesales de las demás partes del proceso y la conducta de las partes frente a tal incumplimiento.

A partir del principio de acceso a la Administración de Justicia, más en un derecho social, se ha construido el criterio hermenéutico denominado principio *pro actione* o *favor actionis* según el cual a la hora de interpretar las normas procesales conforme a la Constitución Política debe hacerse en el sentido más favorable para la efectividad de dicho acceso.

Por lo anterior, no es razonable para la Sala que por un exceso de formalismo en la interpretación de una norma del Código General del Proceso, se sacrifique el poder demostrar un eventual derecho, en otras palabras, por un defecto en los requisitos de la contestación de la demanda, - que para esta Sala no lo es -, se imposibilita en un Estado Social de Derecho, el efectivo acceso a la justicia, violentándose de esa manera el derecho a la prueba y anteponiendo el derecho adjetivo sobre el derecho sustancial. Por lo anterior no resulta razonable la primera argumentación del juez.

El segundo argumento del A quo ejemplificó en su decisión, eventos en los que la prueba testimonial sería inútil, impertinente e inconducente, pero al revisar los hechos de la demanda que no cuentan con un sustento probatorio ya enunciado, observa la Corporación, que la accionada contaba con la posibilidad de solicitar prueba testimonial a efectos de aclarar, controvertir o desvirtuar los hechos que no cuentan con una prueba documental, y aún en caso de existir prueba documental, a efectos de dar claridad sobre los mismos.

De una adecuada sindéresis observa la Sala, que el Juzgado admitió la contestación de la demanda, por encontrarla conforme (artículo 31 del CPTSS), es decir no formuló reparo frente a la forma como se solicitaron las pruebas, pero, al decretar las mismas, la niega por un defecto formal, que como se demostró, de una lectura atenta no quedaba duda sobre que iban a declarar los terceros, cercenando el derecho a la prueba.

En la sentencia SJ 15036 de 2014, la Corte Suprema de justicia señaló:

“El artículo 230 de la Constitución política señala que los jueces en sus providencias solo se someten al imperio de la ley, también lo hacen los artículos 229 y 2° de la ley 270 de 1996 (ley estatutaria de la administración de justicia) que garantizan el derecho al acceso a la administración de justicia cuyo matiz principal es que a los asociados

se les ofrezca una solución efectiva y de fondo a los conflictos que hayan puesto a consideración de la jurisdicción. Labor que deben realizar los jueces conforme el ordenamiento jurídico que conocen. (subrayas fuera de texto)

Lo expuesto significa que en procura de materializar el derecho a la justicia de los jueces no se encuentran atados a los argumentos esbozados por las partes en tanto que como conocedores del derecho y con miras a resolver los asuntos que le sean planteados en la demanda o el recurso de apelación, deben investigar y aplicar las normas que según su saber y ciencia estimen que regulan el caso. De igual manera los jueces en su condición de destinatarios de la prueba los que la deben valorar y apreciar libremente según los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes artículo 61 del C.P.T. y de la S.S.”(Resalto de la Sala)

Por lo anterior, considera la Corporación, se debió decretar la prueba válidamente solicitada para efectos de poder ejercer la accionada el derecho de defensa y contradicción y justificar los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

Por otro lado, en la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, el A quo señaló que el Tribunal podía hacer uso del artículo 330 del CGP en caso de considerar necesario la prueba testimonial.

Al respecto considera la Sala que nuevamente se equivoca el Juez con dicha solución, pues se repite, solo se puede aplicar el artículo 151 del CPTSS si **no existe norma aplicable** en el Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social. Y en ese sentido el art. 83 del CPTSS, reza:

“Casos en que el Tribunal puede ordenar y practicar pruebas. Las partes no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia.

Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el Tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta.”
(...)

Diáfano es el precepto al señalar que solo en 3 casos puede el Tribunal Superior del Distrito Judicial ordenar y practicar pruebas. “1. Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas”, en el presente proceso no fueron decretadas. 2. Cuando las considere necesarias para resolver la apelación, en este caso no aplica, por cuanto precisamente lo que se quiere por la parte demandante es que se analice si el juez debió decretar la prueba por ser necesaria, pertinente y conducente y 3. Cuando lo considere necesario el

Tribunal, lo hará de oficio, sin que tenga sentido practicarlas en segunda instancia, quitándole la garantía de la doble instancia a las partes.

Por lo anterior, la consecuencia necesaria de haber salido avante el recurso de apelación por no haberse decretado la prueba necesaria, pertinente y conducente para las resultas del proceso es dejar sin valor lo actuado a partir del auto que decretó las pruebas inclusive, sin que pierdan valor las ya practicadas, y continuar el proceso, desde esa etapa.

Sin costas por haber salido avante el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto de primera instancia emitido por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que no decretó las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandada, para en su lugar ordenar que se decreten y practiquen, dejando sin valor lo actuado a partir del auto que decreta las pruebas, inclusive, sin que pierdan valor las ya practicadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia y se continúe el proceso, desde esa etapa.

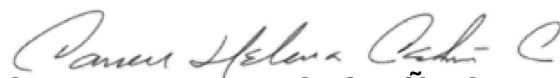
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia

TERCERO: Lo anterior se notifica por ESTADOS.

Los magistrados




HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-16-2021-00251-01
Radicado Interno 013-24



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 046 del 14 de
marzo de 2024

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>